



GOVERNMENT OF TAMAUPLIPAS

Tres gobernadores estatales de México participan en la cabalgata interestatal de 2007, que tuvo lugar en el mes de marzo. De izquierda a derecha: Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas; Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila, y José Natividad González Parás, gobernador de Nuevo León.

Un frente común para combatir a los capos de la droga

La implantación del plan del presidente Calderón podría tomar años

POR LISA J. ADAMS

LOS GOBERNADORES DE TRES ESTADOS fronterizos del norte de México dieron la imagen perfecta de tradición y unidad mexicanas montando lado a lado en la celebración anual de la cabalgata del orgullo regional. La aberración: cientos de efectivos policiales estatales y federales los protegían con armas de alto poder a lo largo de la calzada y desde los tejados. La cabalgata anual tiene lugar para celebrar la unidad de culturas y metas, pero este año, el séptimo, adquirió un significado más profundo: conjuntar fuerzas contra los mortíferos traficantes de drogas que han convertido sus comunidades en ensangrentados campos de batalla.

Los 31 estados de la federación mexicana y la ciudad de México (el Distrito Federal), están colaborando entre sí y con el gobierno federal como nunca antes para combatir a los despiadados carteles de la droga que mueven miles de millones de dólares, y que, enfrascados en una competencia brutal por el control de las principales rutas de contrabando, ejercen la violencia de manera cada vez más descarada contra las mal equipadas y corruptas agencias antidrogas encargadas de controlarlos. “En lo que corresponde al narcotráfico, vamos a seguir dando la batalla, y en esto vamos a tener que trabajar juntos”, declaró Natividad González Parás, gobernador de Nuevo León, al unirse a sus pares de los estados de Coahuila y Tamauli-

pas en una jornada de 53 kilómetros a través de la región, a finales de marzo de 2007.

Al finalizar la cabalgata de dos días, las autoridades de Coahuila, Durango, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, a los que se unió el estado de Texas, Estados Unidos, anunciaron que habían firmado 19 acuerdos de cooperación, incluyendo un acuerdo para compartir información sobre inteligencia y establecer operaciones de colaboración contra el crimen organizado.

Los estados instalan controles carreteros

Pocos días después, en la capital neoleonesa de Monterrey las autoridades revelaron que, en colaboración con sus estados vecinos, establecerían controles carreteros para detener a los narcotraficantes que cruzaran sus fronteras. La razón: la ejecución de nueve personas en dicha ciudad en menos de 48 horas, entre ellas, dos comandantes de la policía. Durango, un estado norteño asolado por el crimen, ha creado alianzas similares con los estados colindantes de Coahuila y Sonora.

En febrero, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) hizo un pronunciamiento relativo a la seguridad pública en el que expresó su “plena disposición para sumar esfuerzos y recursos con el gobierno federal. Nuestro compromiso por construir un solo frente fuerte, decidido y vigoroso que [...] nos permita afirmar [...] que ningun-

na fuerza criminal puede ser superior a la fuerza del Estado mexicano”.

No siempre fue así. En el pasado, no había colaboración alguna entre los gobiernos municipal, estatal y federal de México sino que competían entre sí o se pasaban el bulto unos a otros. María del Rosario Castro Lozano, Coordinadora del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), órgano de la Secretaría de Gobernación, señaló que estaban sentadas las bases legales para esta cooperación pero no se habían obtenido resultados. Los estados afirmaban que esta responsabilidad no era suya sino del gobierno federal y los municipios alegaban que era jurisdicción de los estados. Esto ha cambiado —dice— ahora consideran que la seguridad pública es responsabilidad de todos, comparten información sobre inteligencia y están mejor coordinados para las acciones preventivas y punitivas. Esta nueva forma de cooperación tiene una doble razón: el reconocimiento, cada vez más amplio, de que los estados no pueden afrontar por sí solos el poder del narcotráfico y la insistencia del presidente Felipe Calderón en que la seguridad pública sea considerada la más alta prioridad de la nación.

La magnitud del problema es enorme. Dos carteles rivales, el de Sinaloa y el del Golfo, libran una batalla sangrienta entre sí y con los agentes de la policía por el control de las rutas del contrabando y de un mercado interno en constante crecimiento. En

Lisa J. Adams es corresponsal de *The Associated Press* en la ciudad de México. Durante los últimos siete años, ha cubierto una amplia gama de temas sobre México y Centroamérica.

México hubo cerca de 500 muertes relacionadas con las drogas durante los primeros tres meses del año, de acuerdo con funcionarios que atribuyen parte del incremento de la violencia a la necesidad de llenar los vacíos de poder que han dejado las detenciones de los altos mandos de los carteles en los últimos años. Entre las víctimas se cuentan más de 70 agentes de policía, de acuerdo con Francisco Javier Santos Arreola, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

En la ciudad de México, Jorge Chabat, experto en narcotráfico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que como el problema es tan grave, que los estados, abrumados por la magnitud del problema, buscan el apoyo de otros estados. Según Chabat, todo parece indicar que ahora existe mayor colaboración que en el pasado.

Por lo tanto, desde que tomó posesión de su cargo el 1 de diciembre de 2006 hasta ahora, el presidente Calderón, miembro del Partido Acción Nacional (PAN) —de tendencia conservadora— ha enviado a más de 24 000 miembros del ejército a luchar contra el crimen organizado a los estados del norte: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, y del sur: Guerrero, Chiapas y Michoacán (su estado natal), entre otros estados. El presidente Calderón enfatiza que la guerra contra los narcotraficantes sólo se ganará con una cooperación permanente y a largo plazo entre las instituciones de combate a la delincuencia a nivel federal, local y municipal. “Es indispensable que trabajemos unidos”, expresó el presidente Calderón en una reunión de gobernadores estatales y altos funcionarios de seguridad pública celebrada en enero pasado.

Calderón promete una reforma de los cuerpos policíacos

Una pieza clave de la estrategia contra el crimen del presidente Calderón es “Plataforma México”, plan por el que se establece una base de datos de inteligencia nacional sobre narcotráfico, a la que tendrán acceso los tres órdenes de gobierno. También propuso modernizar las fuerzas policíacas y las agencias de policía de los 31 estados y del Distrito Federal mediante la adopción de estándares internacionales para la capacitación, la aplicación de exámenes para descartar a los elementos corruptos y la introducción de tecnología actualizada.

El Presidente ha manifestado su propósito de que todas las fuerzas policíacas de México —locales, estatales y, por supuesto, federales— cumplan con estándares que aseguren a los mexicanos que pueden confiar en sus policías. Además, su propuesta comprende importantes reformas al sistema de justicia mexicano, por años caracte-

rizado por la corrupción, la ineficiencia y la falta de rendición de cuentas a la ciudadanía. Las reformas propuestas, algunas de las cuales requieren aprobación del Congreso, incluyen juicios orales, programas de protección de testigos y la aplicación de un código penal único en todo el país. En la actualidad, cada estado tiene su propio código, y el presidente Calderón sostuvo que las diferentes definiciones y penas que se imponen a los delitos, a menudo crean vacíos legales que son utilizados por la delincuencia para evadir la justicia.

Los estados mexicanos empiezan a colaborar

De hecho —explica Jorge Chabat—, la colaboración de los estados con el gobierno federal ya había sido propuesta en 1995 dentro del nuevo sistema nacional de seguridad pública que se estableció entonces, y que era un mecanismo que también contemplaba una base de datos de inteligencia nacional.



REUTERS/DANIEL AGUILAR

Un agente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) monta guardia ante los objetos asegurados en varias redadas antinarcóticas que se llevaron a cabo en México, en el mes de abril.

Sin embargo —considera Chabat— el problema, tanto entonces como cuando gobernaba Vicente Fox (antecesor del presidente Felipe Calderón) “fue que algunos estados no proporcionaron información y algunos otros la dieron incompleta, lo que impidió un funcionamiento eficiente. No existían mecanismos que los obligaran a participar. Se trataba de algo, hasta cierto punto, voluntario”.

Los recursos económicos también fueron un obstáculo. De acuerdo con la licenciada Castro Lozano el financiamiento federal para reforzar a los cuerpos policíacos con nuevo equipo o mejor capacitación a menudo no pudo alcanzar su objetivo en un sistema que permitía a los estados distribuir los recursos como lo consideraran conveniente. Por el contrario, en el nuevo paquete de ayuda federal a los estados planteado por el presidente Calderón y aprobado por el Congreso, la asignación de recursos económicos está destinada a proyectos y objetivos específicos, y se practicarán auditorías a los

gobiernos locales para asegurar que los fondos se hayan empleado conforme a lo propuesto.

El presidente Calderón ha establecido también exámenes toxicológicos obligatorios en las instituciones policíacas y un sistema para saber en qué medida los estados cumplen las instrucciones de proporcionar información a la base de datos nacional.

La aprobación de la legislatura será la última prueba

Al igual que el presidente Calderón, el ex presidente Fox presentó un paquete enorme de reformas judiciales y legales al Congreso, pero se estancaron porque su partido no tenía mayoría en ninguna de las dos Cámaras y se encontraron con la resistencia de los partidos de oposición que además frustraron sus propuestas de reforma energética, fiscal y laboral. Posiblemente el presidente Calderón corra con mejor suerte. Su partido tiene una mayoría relativa, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y el presidente —como buen político de carrera— ha mostrado una capacidad para negociar con sus oponentes que no tenía su antecesor. La nueva propuesta de presupuesto federal para 2007 del Presidente pasó sin tropiezos por la legislatura federal, misma que también aprobó recientemente la revisión al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado sometida a su consideración por el Ejecutivo, que es la primera reforma federal importante en el país en más de una década. Aun así, construir un consenso político representa sólo el primer paso para sacar adelante las reformas relativas a la seguridad pública y al sistema judicial y carcelario necesarias para combatir con éxito al crimen organizado. En caso de ser aprobadas, la puesta en práctica de estas acciones tomará años.

Entre tanto, las poderosas bandas de narcotraficantes están dando señales de que no piensan rendirse fácilmente. Este año, exactamente entre el 6 de febrero y el 2 de abril, los delitos asociados a las drogas reclamaron más de dos docenas de víctimas, incluidos doce agentes de la policía; la hija de un general del ejército, a la que le dispararon en la ciudad de México; dos supuestos informantes de la policía en Cancún, y dos pretendidos miembros de cárteles, uno de los cuales fue decapitado, como se muestra en un video que ha sido ampliamente distribuido.

El presidente Calderón ha jurado que seguirá adelante. Recientemente declaró, como parte de un discurso para infundirle ánimo a los soldados que combaten las drogas, que “no habrá rendición ante la provocación o los ataques”. También agregó que se combatirá sin tregua ni cuartel a los enemigos de México. 